

Reforma o ruptura

DESPUES DE RENTERIA, SEGUNDO ASALTO

FERNANDO LOPEZ AGUDIN

Si los sucesos de Vitoria y Montejurra prefiguraban en la primavera de 1976 el fracaso y caída del primer intento reformista, los que acaban de suceder en Pamplona, San Sebastián y Rentería, preludian igualmente el agotamiento de la presente experiencia reformista.

LO ocurrido en estas tres ciudades, sobre todo el vandalismo sufrido por la última, sintetizan por sí solos tanto el deterioro creciente del Estado —hechos semejantes nos colocan al nivel de país subdesarrollado o del Tercer Mundo— como la incapacidad centrista para abordar las tareas pendientes de la consolidación democrática.

Si por aquel entonces el problema con que tropezaban los primeros reformistas consistía en cómo salir de la dictadura del 18 de Julio, ahora el obstáculo reside en cómo operar para que no se creen las condiciones para que una parte decisiva de la sociedad española desee volver a reeditar fechas que en estos días han celebrado las muy reducidas minorías de extrema derecha.

Es decir, de nuevo de un modo paulatino y lento vuelve a emerger el Guadiana de la reforma o ruptura que creíamos haber superado. Porque todos estos sucesos vienen a confirmar que no hay ningún camino intermedio para solucionar esta dialéctica y que el centrismo que aparecía como una vía atípica y original no es más que un callejón sin salida.

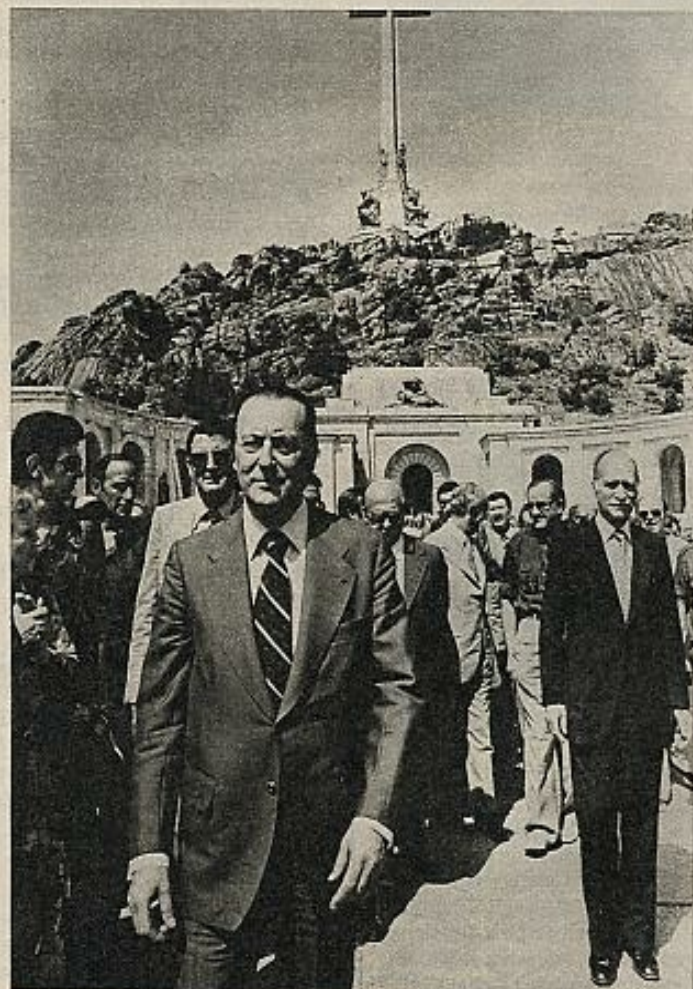
Es precisamente la victoria de las tesis reformistas la que hoy crea los problemas con los que se enfrenta el Gobierno. Su éxito en lograr un camino inédito es el que hoy les impide afrontar de lleno las tareas imprescindibles para la consolidación de la democracia. Así quienes vencieron en la batalla inicial de la democracia, van a perder su batalla final por las mismas razones que los primeros reformistas perdieron el combate de la transición: la no ruptura con una serie de intereses anacrónicos que imposi-

bilitan y condicionan extraordinariamente el asentamiento definitivo de la democracia.

El triunfo anterior, obtenido en base a una serie de pactos y concesiones tácitas e implícitas con la burocracia franquista, impide que económica, como social y administrativamente puedan iniciar la necesaria modernización que reclaman los aparatos de Estado para

adecuarse a un proceso de cambio democrático.

Así, poco a poco va creándose en la sociedad española una nueva correlación de fuerzas que gira, una vez más, en torno al eje momentáneamente marginado de la reforma o la ruptura. Con excepción de Alianza Popular, no hay grupo parlamentario que no refleje internamente, en mayor o menor grado,



Mientras cobra de nuevo actualidad la alternativa reforma o ruptura, la extrema derecha se organiza. El eurofascismo ha hecho bandera del Alzamiento del 18 de Julio. Sobre estas líneas: Blas Piñar y Giorgio Almirante ante el monumento que se ha convertido en símbolo de un período que la Constitución trata de cerrar.

esta discusión política. Porque a un año de las elecciones generales del 15 de junio, que marcaron el triunfo político de la operación reformista, el proceso democrático se encuentra totalmente empantanado en el preciso instante en que los debates constitucionales tocan a su fin. En este sentido la situación de Euskadi, al margen de las estrategias provocadoras de los nacionalistas radicales y de los "incontrolados", resume por sí sola el "impasse" global de todo el cambio democrático.

El hecho de que la Constitución sea una letra a noventa días acelera esta inquietud política en todas las clases sociales del país. Un texto constitucional al ser un papel mojado si no va acompañado del desarrollo simultáneo del proceso democrático es el mejor acicate para que unos y otros vuelvan a plantearse la necesidad de resucitar la vieja dialéctica de la reforma o la ruptura. Así el proceso político tendría dos etapas diferenciadas: una, reformista para salir de la dictadura y otra, rupturista para consolidar la democracia.

Cinco nudos gordianos

Es evidente en la actual situación política española cómo lentamente van planteándose dos posturas antagónicas, que corresponden a una concepción reformista o rupturista implícita, en los principales problemas pendientes a los que tiene que hacer frente el nuevo régimen democrático si desea tener perspectivas y no facilitar la creación de condiciones para que alguna clase social vuelva a sentir lo que claramente no siente hoy ningún sector social de peso en el país: la tentación involucionista. Porque de no cortarse estos nudos gordianos, que se centran fundamentalmente en la necesidad de modernizar el Estado, la tensión sociopolítica adquirirá unos niveles difícilmente soportables para un sistema democrático tan frágil e incipiente como el español.

Desde el primer momento en que se firmaron los pactos de la Moncloa hemos asistido a dos lecturas e interpretaciones distintas que han sido calificadas tan errónea como superficialmente con los adjetivos de derechas o izquierdas, cuando en realidad su verdadera di-



Policías armados, durante su actuación "incontrolada" en Rentería. Estaban hambrientos, explicaría Blas Piñar. Pero la propia Policía lo ha negado.

visión gira —por encima de partidos políticos e ideologías como demuestra la dimisión del profesor Fuentes Quintana— en torno a los partidarios de aplicar únicamente la primera parte de los citados planes, que hacen referencia a la regulación precios-salarios, y los defensores de aplicar también la segunda parte, que hace mención de las reformas estructurales imprescindibles para poder salir de la crisis. Medio año después de la firma de este documento político-económico es obvio que lo que los especialistas en la materia denominan "franquismo económico" ha vencido en su objetivo. Lo sucedido con el plan energético, donde el proyecto enviado a las Cortes es más regresivo que incluso el plan de Alberto Oliart, es toda una lección política.

Esto indica cómo el aparato del Estado no puede hacer frente a las lógicas presiones de los afectados por la segunda parte de los pactos de la Moncloa, lo que no tiene nada de extraño si se tiene en cuenta que la democracia ha heredado intacta una Administración del viejo régimen. No hace mucho el diario "El País" —22 febrero 1978— publicaba una relación de cuarenta y un altos cargos de empresas vinculadas al Estado en manos de ex ministros del anterior régimen. Situación que se reproduce y amplía en algunos aparatos decisivos, como los encargados de velar por la seguridad, que ni siquiera han iniciado un proceso de renovación profesional y técnico como el que se ha registrado en las Fuerzas Armadas. Todo el cambio se limita a cambiar el color gris por el marrón, olvidan-

do cómo un Decreto antiterrorista puede ser desvirtuado si es exactamente aplicado por los mismos hombres que aplicaban los estados de excepción durante la dictadura. Lo sucedido estos días ahorra mayores consideraciones y apunta también a la no democratización de los medios de comunicación del Estado —especialmente RTVE que ofreció una imagen parcial de lo ocurrido en el País Vasco—, que ignoran tanto su destino como una renovación democrática. En este sentido, las dos posturas enfrentadas —"statu quo" frente a modernización— van más allá también de la dicotomía derechas-izquierdas.

No menos grave es la situación de los poderes locales, provinciales, regionales o nacionales. Los dos primeros continúan en manos de los franquistas —tres años después

de la desaparición biológica del dictador—, y el tercero, en manos democráticas, es el mismísimo antipoder por la carencia de atribuciones, medios, presupuestos, rango protocolario. Los sucesos de Euzkadi están claramente relacionados con el descafeinamiento de los procesos preautonómicos, que, además, son claramente combatidos por los poderes locales, como ocurre con la desgraciada Junta de Andalucía. No hace falta señalar también que en este tema la dualidad de posturas sobrepasa claramente la división de los dos bloques sociales, a pesar de que inicialmente se intentó utilizar el proceso catalán en contra de la izquierda con la baza del presidente Josep Tarradellas.

Igualmente de problemática, aunque menos espectacular al menos por ahora, son las dificultades que encuentran las organizaciones sociales —tanto empresariales como sindicales— para desarrollar su importante labor en la sociedad española. CC. OO. y UGT siguen sin conocer el destino del patrimonio sindical, amén de otras muchas cortapisas para su trabajo sindical, y la CEOE conoce claras injerencias políticas que tratan de configurar una organización patronal amarillista o de tipo verticalista que secunde los planteamientos oficiales. Con lo que no se sabe si es más difícil para un empresario no contar con sindicatos fuertes y reales que para un trabajador no contar con una patronal representativa. En cualquier caso, la posibilidad de negociación, vital para poder salir de la crisis económica, aparece seriamente deteriorada de antemano.

La ni siquiera tentativa de solucionar parte de estos problemas se desprende oficialmente de la prioridad constitucional, que desaparece inmediatamente en cuanto se establece la conclusión inevitable: la convocatoria de elecciones generales tras el referéndum de la Constitución. Así tenemos un proceso constituyente "de facto" y una reforma política "de iure" que permite la posibilidad de alargar el agotamiento del reformismo por cuatro años más. Aquí aparecen también enfrentadas las dos posturas por encima de criterios políticos, orgánicos e ideológicos. No ha habido proceso constituyente que no dessembrase en elecciones generales (tesis rupturista) y la originalidad y atipicidad del proceso carpetovetó-

Reforma o ruptura

nico debe prolongarse un quinquenio más (tesis reformista).

Nuevos protagonistas

Es decir, el escenario es básicamente el mismo que existía un par de años atrás —con la variante de que la correlación de fuerzas ha cambiado a favor de la ruptura—, pero los protagonistas, a pesar de ser esencialmente los mismos, han cambiado sus papeles respectivos. Con excepción de Alianza Popular, y todo lo que se rodea en torno a la indefinida Nueva Mayoría, los otros tres grupos parlamentarios han cambiado de planteamiento.

el inmediato pasado. El debilitamiento de las posturas centristas, como consecuencia del resurgir de la dialéctica reforma-ruptura, va a hacer rebrotar con especial fuerza esta dualidad de posiciones que pugnan por alcanzar la hegemonía en la principal organización política de la derecha española.

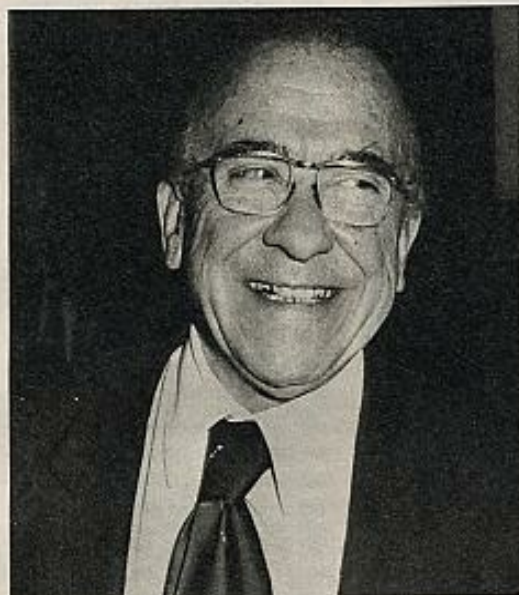
El otro gran partido del país, el PSOE, ha variado asimismo sus anteriores posiciones, adaptándolas a la nueva situación. Su acertada y clarividente posición política en la anterior lucha entre la reforma y la ruptura —que ha permitido en la actualidad ser al PSOE lo que hoy es el PSOE— se decanta ahora ablemente hacia la ruptura. De hecho es en estos momentos el gran pro-

ducido en el Partido Comunista de España. De propulsor de la anterior ruptura ha pasado a ser aliado de la reforma en un sorprendente e inesperado viraje de su principal dirigente político. Aunque existe una parte de su dirección que piensa que Santiago Carrillo peca hoy por defecto como ayer pecó por exceso —en la dialéctica reforma-ruptura—, el dato incontestable político del que hay que partir es el hecho de que el más radical rupturista de hace tan sólo unos meses podría ser hoy el más eficaz e inteligente defensor de los reformistas. Tan es así, que de hecho parte de las posibilidades de la reforma dependen en gran medida de si este viejo líder político mantiene o no hasta el

española, el problema fundamental reside en consolidar la democracia, ya que ninguno de ellos necesita hoy ningún tipo de involución.

Ello es lo que va a permitir que el desarrollo y desenlace de este segundo asalto sea más limpio, dado que el veredicto final va a estar en las urnas en lugar de la lucha de pasillos, cámaras, antecámaras y recámaras que envolvieron la anterior pugna de hace un par de años. Porque, independientemente de que se ensayen o no maniobras dilatorias en cuanto a la convocatoria electoral, sin prisas pero sin pausas va articulándose la correlación de fuerzas a favor de quienes son partidarios de modernizar las estructuras estatales y de aplicar íntegramente el plan de saneamiento económico. Es decir, de quienes desean romper no sólo con el pasado político formal, sino también con el pasado económico, administrativo, social, etcétera; o mejor dicho, de sentar las bases estructurales y superestructurales de la democracia.

Por supuesto, esta nueva coincidencia rupturista de sectores de la derecha y del principal partido de la izquierda esconde una lucha entre una concepción que no cierra la puerta a perspectivas progresistas futuras y otro enfoque que se limita a ser gestor del actual sistema socioeconómico. Pero este combate es fundamentalmente de mañana y de pasado mañana, siendo su principal escenario o campo de batalla el interior del mismo Partido Socialista Obrero Español. De momento, el interés común de todo este amplio frente rupturista —una nueva Junta Democrática con más viabilidad y operatividad que la aventurera Junta anterior— se centra en conseguir que la dialéctica reforma o ruptura se decante, en esta ocasión, a favor de la adecuación y modernización de los aparatos de estado a la evolución política; aun estando presentes, de modo subordinado, distintas interpretaciones de la ruptura tanto en el tipo de Gobierno, tareas programáticas, "timing" renovador y política de alianzas. Importantes matizaciones que vendrán determinadas en función de los resultados electorales de las elecciones generales, pero que no alterarán sustancialmente el desenlace del segundo asalto de esta dialéctica política que ha presidido y vuelve a presidir el prólogo y el epílogo del cambio político. ■



Santiago Carrillo: de propulsor de la anterior ruptura a aliado de la reforma.



El socialista Javier Solana es el autor del nuevo manifiesto de la ruptura democrática.

Unión de Centro Democrático, que logró aglutinar en torno a la reforma a todas las fracciones políticas de la derecha, vuelve a conocer en la actualidad una pugna solapada entre reformistas y rupturistas que supera la división por tendencias ideológicas o políticas de origen. Aunque los sucesos de Euzkadi hayan servido para polarizar de nuevo la lucha entre "azules" y demócratas, la realidad enseña que no hay ninguna tendencia que colectivamente defienda globalmente una u otra postura. La tentación de modernizar el Estado está latente en una parte del partido gubernamental, puesto que no hay que olvidar que tres de sus cuatro principales tendencias defendieron duramente las posiciones rupturistas en

pulsor de toda la ofensiva rupturista que persigue consolidar la democracia mediante la resolución de los problemas apuntados anteriormente. Su próxima ofensiva contra la política del consenso, anunciada en su última reunión federal, equivale a una implícita declaración de guerra contra los planteamientos reformistas dominantes; pretendiendo articular en torno a su órbita a quienes por su derecha o por su izquierda levantan la bandera de la imprescindible modernización de las estructuras del aparato estatal español. La reciente conferencia de uno de sus principales líderes, Javier Solana, en el Club Siglo XXI —a leer atentamente— es el nuevo manifiesto de la ruptura democrática.

Pero el mayor cambio se ha pro-

ducido en su actual vacilante postura.

En cuanto a la minoría vasca y catalana, se produce la misma división de opiniones y actitudes que en la derecha política de todo el país. Porque al igual que en los puntos en conflicto no existe una bifurcación entre derecha e izquierda, tampoco en el reparto de los papeles de los protagonistas —como acabamos de ver— es posible decir que la derecha o la izquierda defiendan una u otra postura. Ello, y el tipo de tareas que preconizan los actuales rupturistas, es asimismo lo que determina una creciente neutralización de los poderes fácticos que en la anterior pugna optaron clara y decisivamente por la reforma. Y es que para estos sectores del poder, como para toda sociedad